

El impacto de 1968 en España

Paul Preston

Paul Preston es catedrático de Historia en la London School of Economics. Se ofrece aquí el texto de la conferencia que dictó el 20 de octubre de 2008 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València (Sala Joan Fuster), en el marco de su estancia en València impartiendo un curso en la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo patrocinada por la Fundación Cañada Blanch.

Hay varios años claves en el desarrollo del régimen de Franco. 1945 fue el año de la caída de Hitler y supuso lo que se ha denominado la noche negra del franquismo, de la cual salió Franco a base de quitarle poder a la Falange y de orientar su régimen hacia los Estados Unidos. 1959 fue el año en que Franco, con 66 años cumplidos –o sea ya habiendo alcanzado la edad en la que mucha gente piensa en jubilarse– tuvo que enfrentar una grave crisis económica. Franco se opuso ferozmente a la única solución de la crisis –la drástica devaluación de la peseta y un saneamiento de la economía bajo las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Con una mínima comprensión de la economía, estaba convencido de que esto era un complot masónico pero, finalmente, el 18 de febrero de 1959 ante la posibilidad de la vuelta de los gasógenos y el racionamiento, se encogió de hombros y le dijo a su ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, «haga lo que le parezca». Suponía pasar de ser un presidente de gobierno a un Jefe de Estado ceremonial. Dejar la economía en manos de los tecnócratas iba a crear una serie de contradicciones que se verían con claridad en el tercer de estos años claves, el que nos ocupa aquí: 1968.

Para entender la importancia de 1968, tenemos que juntar dos historias convergentes –la de la gradual desintegración del dictador y su régimen, la de la oposición política, estudiantil y obrera. Pensamos en 1968 como un símbolo de modernidad: de Che Guevara y de los Beatles, la revolución musical y sexual proveniente de California y de Inglaterra y los acontecimientos de París en mayo de ese mismo año. Sin embargo, también fue un año de intentos de dar la vuelta al reloj como hicieron los rusos al invadir Checoslovaquia en agosto o el régimen de Franco a lo largo del año. 1968 reveló hasta qué punto el régimen seguía viviendo en el pasado aunque, como veremos, los acontecimientos de aquel año revelaron elementos de la situación que serían cruciales para el progreso hacia la eventual democratización del país.

El compromiso contraído por el Gobierno de Franco en febrero de 1959 para alcanzar un desarrollo económico capitalista moderno supuso una victoria de los tecnócratas del Opus Dei sobre la Falange. Tendría profundas consecuencias a la larga, pero de inmediato no alteró la naturaleza represiva del régimen. Se llevó a cabo la liberalización económica tras el escudo de una representación militar reforzada en el gobierno. La medida crucial a este respecto fue el nombramiento del general Camilo Alonso Vega como ministro de la Gobernación, para aplicar una represión rápida y brutal cuando la dislocación social originada por la liberalización desencadenase el descontento. La austeridad estricta del Plan de Estabilización (1959) acarreó efectivamente un descenso inmediato del nivel de vida para la clase trabajadora. Sin embargo, a principios de los años sesenta la renta per cápita empezó a aumentar de forma espectacular. La nueva clase obrera se apresuró a flexionar los músculos y desencadenó varias huelgas en el año 1962, con resultados

positivos porque en aquella atmósfera de prosperidad repentina los industriales se mostraban remisos a cualquier pérdida de producción. Las consecuencias de ese *sprint* hacia la modernización sembraron la inquietud en muchos círculos franquistas, particularmente dentro del ejército y de la Falange.

Según los tecnócratas del Opus Dei, capitaneados por el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, la clave para resolver todos los problemas de España residía en su incorporación plena al capitalismo occidental. Con tal fin se presentó una solicitud a la CEE en febrero de 1962 requiriendo el ingreso de España.

A lo largo de los años sesenta, el progreso económico espectacular fue acompañado por manifestaciones de la naturaleza bárbara del régimen. En abril de 1963, después de torturas horribles, fue fusilado Julián Grimau. En el mismo año, dos anarquistas, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez fueron ejecutados por garrote vil. Sin embargo, el incremento de la renta disponible para vastos sectores de la sociedad española fue un factor que ayudó a la supervivencia del régimen. La mejoría del nivel de vida, aunque muy desigual y basada en parte en los sacrificios de trabajadores emigrados, contribuyó al éxito del régimen en el referéndum constitucional franquista del 14 de diciembre de 1966, que pidió el refrendo popular para los preparativos sobre la sucesión de Franco.

De todas formas, el crecimiento económico de los años sesenta fue una especie de bomba política de espoleta retardada, pues creó los problemas estructurales que, más adelante, iban a derribar el edificio político del franquismo. Sin embargo, a corto plazo y no obstante las importantes deficiencias de los planes de desarrollo, la prosperidad inmediata generada dio un respiro al régimen. La oposición obrera continuaba acrecentándose, pero al propio tiempo existía un amplio sector de capas medias y de clase obrera, una mayoría no politizada, que aceptaba con alivio mejoras en la alimentación y el vestido. Ahora bien, el resultado del referéndum oscurecía la realidad de la protesta obrera y estudiantil. Asimismo resaltaba el hecho de que el régimen estaba hipotecando su bienestar futuro en aras del crecimiento continuado.

La clase obrera, con su fuerza recién adquirida, no renunciaría fácilmente a las mejoras en el nivel de vida conquistadas en los años sesenta. Al renunciar a la autarquía, el régimen se había hecho vulnerable a los cambios en la economía internacional. No pasaría mucho tiempo sin que los capitalistas españoles más perspicaces advirtieran que un sistema político más abierto podría absorber mejor las tensiones sociales resultantes de la recesión económica. Incluso en los días dorados de mediados de la década, el crecimiento estaba introduciendo una cuña entre ciertos sectores de la elite económica y el régimen. Se sabía que algunos hombres de negocios pactaban secretamente con el poderoso sindicato clandestino Comisiones Obreras, en vez de hacerlo con la anquilosada burocracia sindical controlada por el Estado. Pues los acuerdos acerca del salario y la productividad concertados con los representantes genuinos de los trabajadores tenían muchas más probabilidades de ser efectivos que los ilusorios convenios fabricados por los sindicatos verticales.

La situación paralela de las universidades fue el hecho que ejemplificó en mayor medida las contradicciones del esfuerzo del régimen por mantener una estructura política anticuada apostando al mismo tiempo por un auge económico frenético. Un indicio de lo reaccionario del sistema universitario podríamos encontrarlo en lo siguiente: el

ministro de Educación durante los primeros diez años del franquismo, José Ibáñez Martín, presentó a las Cortes la Ley de Ordenación Universitaria con las palabras «lo verdaderamente importante es arrancar de la docencia y de la creación científica la neutralidad ideológica y desterrar el laicismo, para formar una nueva juventud poseída de aquel principio agustiniano de que mucha ciencia no acerca al Ser Supremo». La ley constitutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas decía que su objetivo era «imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro glorioso movimiento». La universidad era burocratizada, corrompida, dogmática –lejos de las glorias de la época republicana.

Desde 1956 se había dado una agitación estudiantil intermitente, y desde 1962, la ocupación policial de los campus en diversas universidades fue casi permanente. A la luz de los acontecimientos de otros países, sobre todo Francia e Italia, el régimen siguió con intensa preocupación las manifestaciones estudiantiles. Al fin y al cabo, no sólo se educaba a los estudiantes en general para ser los futuros funcionarios del Estado y los empresarios de la industria española, sino que, además, muchos de los revoltosos que caían bajo las porras policiales eran hijos e hijas de las clases medias acomodadas, e incluso de veteranos funcionarios franquistas.

Pese a la creciente intensidad del antifranquismo dentro de los movimientos obrero y estudiantil, los tecnócratas esperaban que el nivel de vida en ascenso eliminase gradualmente el antifranquismo, y que mientras tanto los mecanismos represivos de éste ahogaran los problemas más acuciantes. Las contradicciones irreconciliables entre las anticuadas formas políticas del régimen y la dinámica de una sociedad y una economía rápidamente cambiantes afloraron de forma creciente a la superficie en 1968.

Por añadidura, los problemas de los trabajadores introdujeron una cuña entre el franquismo y la Iglesia católica. Durante los años cincuenta, organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica habían constituido un refugio para los activistas obreros. De resultas, muchos sacerdotes jóvenes, agregados como capellanes a esas ramas de la Acción Católica, se habían radicalizado. Por añadidura, en los años sesenta, algunos sacerdotes deseosos de compartir la vida de sus feligreses se hicieron curas obreros.

Cambiaba la realidad social de España: la aparición de un capitalismo a gran escala, nacional y multinacional, como fuerza económica dominante del momento, implicaba la irrelevancia política cada vez más acusada de amplios sectores del sistema franquista. Los sindicatos oficiales y el peso de los cuerpos represivos habían sido herramientas útiles para la oligarquía predominantemente agraria de los años cuarenta y los primeros cincuenta, pero desde 1968 el desarrollo económico y la necesidad de entrar en la CEE que en parte ellos impulsaban gradualmente hacía innecesaria su presencia.

Ya había los contactos clandestinos entre empresarios y Comisiones Obreras. La relación entre los trabajadores –quienes compraban a plazos automóviles, pisos o televisores– por un lado, y los banqueros e industriales dependientes de la productividad continuada, por el otro, pasaba por encima de las estructuras del régimen. Las necesidades de una economía compleja habían creado un nuevo proletariado con niveles de especialización y renta relativamente altos. Muchas de las empresas mayores y más competitivas esperaban integrar a la clase trabajadora dentro del capitalismo mediante convenios sobre la

base de primar la productividad y extender sus operaciones a la CEE, por lo que el régimen de Franco se estaba convirtiendo en un obstáculo formidable para el desarrollo venidero.

Ahora, a lo largo de 1968 se hizo cada vez más evidente que el futuro del régimen peligraba. La oleada creciente de luchas en fábricas y universidades planteó la sucesión de Franco como una cuestión insoslayable. Muchos franquistas hasta entonces des preocupados sintieron la necesidad de revisar sus planteamientos. Los temores sobre el futuro iban a enconar aún más los conflictos entre las familias del régimen, sobre todo entre la Falange y el Opus Dei. El 5 de enero de 1968, Don Juan Carlos cumplió 30 años, la edad a la que la Ley de Sucesión le hacía elegible para ser rey, y el 30 de enero Doña Sofía daba a luz a un hijo y el Príncipe se apresuraba a telefonar a Franco con la noticia. Para Franco, el nacimiento de un heredero varón del Príncipe le convertía en un candidato aún mejor para la sucesión. Sin embargo, si el Opus Dei lo veía como su candidato, la Falange temía que podría albergar esperanzas democratizadoras.

La afirmación del Opus Dei de que la prosperidad permitiría una liberalización indolora y por ende garantizaría la supervivencia del régimen se hacía insostenible ante las numerosas huelgas y manifestaciones, así como la aparición del terrorismo en el País Vasco. Muchos defensores del régimen, particularmente entre las Fuerzas Armadas y la Falange, concluyeron que la modernización había sido un error y que su seguridad estribaba en la vuelta a la línea dura franquista del período inmediatamente posterior a la guerra civil. Sin embargo, otros empezaron a pensar que, si se quería evitar un diluvio revolucionario, la liberalización debería ir mucho más lejos que la tolerancia de las formas más blandas de la oposición democristiana y socialdemócrata. Por lo tanto, el período que seguía a los acontecimientos de 1968 iba a caracterizarse por un retorno a la política inflexible, descaradamente brutal, de los primeros tiempos del franquismo. Frente al recrudecimiento de la oposición en diversos frentes durante 1968, el dictador puso en evidencia los límites de la liberalización, al declarar el «estado de excepción» en el País Vasco. O sea, como veremos, 1968 estimulaba los instintivos reaccionarios del dictador.

PROTAGONISTAS DE 1968

ESTUDIANTES

A mitad de la década de los sesenta empezó, como consecuencia de la política de crecimiento económico, una masiva expansión de las universidades. Desde 1964 cuando había 80,000 estudiantes en España hasta la muerte de Franco, el número fue ampliándose hasta llegar a 385,000. El año que nos interesa, 1968, ya eran 135,000. Esto habría que ponerlo en contexto –en Estados Unidos había en 1968 3500 estudiantes por cada 100,000 habitantes, en Europa occidental, 1500 y en España 600.

A comienzos de 1968, era posible deducir hasta qué punto la situación en las universidades preocupaba a los fieles del régimen a base del siguiente artículo de Torcuato Luca de Tena en el *ABC*, el 24 de febrero de 1968. Bajo el titular «Universidades, centros de subversión», escribía: «Unos padres que mandan a sus hijos a la capital para que se hagan hombres de provecho, ignorantes de que les mandan a centros de subversión, escuelas de malas artes, espejos de chapucerías, donde podrán seguir si les place, con no poco aprovechamiento, cursos de holganza, revueltas y guirigayes para acabar doctorándose

brillantemente en ineptitud. Cuando el día de mañana las empresas seleccionen a sus técnicos, el Estado a sus políticos, los hospitales a sus médicos, el foro a sus letrados y las sociedades a sus expertos, habrá que buscarlos, si Dios no lo remedia, en las promociones anteriores o posteriores a las que hoy día se forman –perdón, deforman– entre unas paredes que de Universidad ... no tienen más que el nombre».

Los acontecimientos en Francia ocurrieron con la universidad española en crisis. La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid (la única del país) fue cerrada por el Rector desde mediados de enero hasta mediados de febrero. El 28 de marzo, se cerró la Complutense entera. Se abrió de nuevo el 6 de mayo. Escasamente dos semanas después, el 18 de mayo, 10,000 estudiantes y trabajadores se reunieron en la Complutense para escuchar un recital de Raimon, el cantautor catalán. Fue un éxito triunfal pero empezaban a ondear banderas republicanas, carteles de Che Guevara, banderas rojas con la hoz y el martillo y pancartas antifranquistas. Una procesión de 5000 empezó a desfilar hacia Madrid coreando «¡Democracia Popular!», «¡España Socialista!» y «¡Abajo Franco!». En el camino, tropezaron con el coche de la Princesa Sofía. Se tiraron cócteles molotov a la policía que finalmente, y con bastante brutalidad, pudo disolver la manifestación. Las agitaciones ya habían provocado la sustitución del ministro de Educación Manuel Lora Tamayo por José Luis Villar Palasí el 14 de abril. A lo largo del año, había incidentes casi a diario en una universidad u otra –sentadas, huelgas, barricadas, boicots a las clases, asambleas libres. El mismo Caudillo estaba preocupado y mencionó las algaradas estudiantiles en un discurso en Sevilla el 22 de junio: «Yo creo en la juventud, en la juventud que es noble, generosa y justa. Lo que hay que hacer es abrir el diálogo, porque hay en ella muchas cosas aprovechables; pero no hay que dejarnos vencer por el pesimismo, ni por los agentes extranjeros». Poco después, en Burgos, el 5 de julio, reveló que, para él, el diálogo era sus discursos. Dijo que el crecimiento económico «no hubiera podido realizarse sin una política: esto requiere unidad y autoridad, requiere disciplina y unidad; disciplina porque es necesario no dejarnos influir por las campañas internacionales y las compras de conciencias. Yo dije hace unos días que creía en la juventud, porque toda mi vida he trabajado con la juventud. ...Pero es necesario conservar el ideario político del Movimiento sin el cual no caben ni son posibles las empresas.»

Había un proceso paralelo en la clase obrera y en ese sector también se repetía la pauta de revuelta seguida de represión dura. El 30 de abril y el 1 de mayo, hubo manifestaciones de protesta organizadas por las Comisiones Obreras. En Madrid, Bilbao y Sevilla, había cargas de la policía a caballo. En la capital, se ocupó militarmente el barrio de Atocha durante el día entero. En el País Vasco, había un crecimiento de la violencia. El 2 de agosto, un comando de ETA mató al jefe de la Brigada Político-Social de la Policía en Guipúzcoa, Melitón Manzanos. El Gobierno proclamó el Estado de Excepción en toda la provincia.

EL RÉGIMEN

Ya a comienzos de la primavera, el vicepresidente, Luis Carrero Blanco había dicho a los oficiales del Estado Mayor (24 de abril de 1968): «Que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo español no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas».

Mucho más interesante es una nota mandada por Carrero Blanco a Franco el 10 de julio de 1968 con el título ASI NO SE PUEDE SEGUIR. Decía: «La situación de la Prensa y en general de todos los órganos de información, incluyendo el libro, debe ser corregida a fondo. Está produciendo un positivo deterioro moral, religioso y político. Todos los escaparates de las librerías están, y las casetas de la Feria del Libro estuvieron, abarrotadas de obras marxistas y de las novelas de erotismo más desenfrenado. Por otra parte, el crecimiento de la inmoralidad de los espectáculos públicos ha sido tremendo en los últimos tiempos. El daño que se está haciendo a la moral pública es grave y hay que ponerle fin. Si la legislación actual no permite corregir esta situación, habrá que dictar nueva legislación, pero así no se puede seguir. Primero, porque España es un país católico y segundo porque el quebrantamiento de la moral del pueblo es la mejor manera de favorecer la acción subversiva que el comunismo fomenta. Ha sido comprobado en varios casos de agitadores universitarios, su previa ruina moral mediante drogas, etc., antes de iniciarles en el maoísmo».

En noviembre, estudiantes enfurecidos por la negativa de las autoridades académicas a una conmemoración de León Felipe, ocuparon el decanato de la Facultad de Derecho y quemaron un retrato del general Franco. El 11 de diciembre, mujeres y madres de los presos políticos de Carabanchel se encerraron en la iglesia jesuita de Serrano frente a la Embajada americana pidiendo el reconocimiento del estatus de preso político –y fueron desalojadas por la policía. El estado de preocupación del régimen se podría colegir del mensaje de fin de año emitido por Franco el 30 de diciembre de 1968. Después de alabar la disciplina como base de la prosperidad, dijo: «Por ello, aun a conciencia del carácter minoritario de algún pequeño sector juvenil contagiado de las ideologías negativas o enrolado en el comercio de la subversión, no queremos dejar de señalar cuánto lamentamos sus errores, que, aunque afortunadamente no alcancen las dimensiones trágicas que se dan en otros países, son suficientes para entorpecer el derecho de una gran mayoría de jóvenes y de sus familias a que la educación y formación profesional pueda desarrollarse con adecuado rendimiento».

CONCLUSIÓN

Toda esta inestabilidad afectaba a una minoría de la población. Las acciones eran esporádicas –se paralizó una universidad u otra, un rama u otro de la industria, pero nunca fue posible paralizar el país entero hasta el punto de hacer tambalear al régimen. Durante los conflictos del 1 de mayo de 1968, la policía logró confinar la protestas a ciertas calles. El tráfico fue paralizado pero el aumento de prosperidad junto con la gran inversión de terror se combinaron para garantizar la pasividad de la gran mayoría. La gente no quería perder sus empleos. Después de tres décadas de propaganda sobre el supuesto desorden republicano, la visión de las huelgas, los estudiantes tirando piedras y cócteles molotov, la violencia en el País Vasco, el sonido de los tiros de la Policía Armada y la Guardia Civil provocaba ansiedad en mucha gente. La proliferación de pequeños grupúsculos maoístas y trotskistas predicando guerras de liberación y alabando el ejemplo de Che Guevara o de Ho Chi Minh, o sea, evangelizando el conflicto armado y la guerra de guerrillas, aumentaba los miedos a los que el régimen había dedicado tanta propaganda.

1968 subrayaba que la poca liberalización que había habido con los tecnócratas se toleraba mientras no hubiera amenazas para la supervivencia del régimen. El cierre de posibilidades de liberalización en España, junto con el ejemplo del extremismo de Francia y California, suscitó un movimiento hacia la izquierda de algunos elementos pero fue siempre minoritario y posiblemente provocado por el propio régimen. Sin embargo, todo era síntoma de algo que había propiciado el régimen y que no podía, ni quería, parar —el crecimiento económico. El desarrollo había creado una nueva clase obrera masiva y una capa de universitarios que viajaban, leían revistas extranjeras. La represión ya no bastaba por sí sola. De hecho, 1968 veía la adopción del Segundo Plan de Desarrollo.

O sea, las contradicciones entre una sociedad cada vez más moderna y un régimen cada vez más anticuado fueron suficiente para provocar a los más avisados franquistas a ir pensando en su propio futuro y en otras opciones para el futuro. El 4 de diciembre de 1968, Franco cumplió 76 años. Ya el 24 de diciembre de 1962 con su accidente de caza, algunos muy atrevidos habían comenzado a pensar en la posibilidad de que podría no ser inmortal. Ya había habido otras manifestaciones de la deteriorada salud de Franco y de su evidente incapacidad. En los círculos políticos se dio gran importancia a un incidente que tuvo lugar durante el verano de 1968 en Santander. Tras una reunión del Consejo de Ministros, uno de sus ministros le pidió a Franco que le firmara una foto en la que aparecían ambos con otros ministros. Franco accedió, se puso las gafas, cogió un bolígrafo y luego vaciló, miró a su ministro con mirada perdida y le dijo «Usted cómo se llama?» Ya se había pasado la supervisión del proceso sucesorio al almirante Carrero Blanco que, desde que se le hizo vicepresidente del Gobierno en 1967, había asumido los asuntos cotidianos. Sin embargo, 1968 fue el comienzo de un proceso que él era incapaz de torear. Hasta su asesinato en 1973, Carrero Blanco tuvo que presenciar la quiebra del barniz de invulnerabilidad atribuido a la dictadura bajo el asalto de ETA, el resurgir del movimiento obrero y la contestación estudiantil. No supo encontrar una respuesta más constructiva que el tradicional recurso franquista a la represión. El futuro económico de España dependía de la posible incorporación a la Comunidad Europea, proceso que exigía una liberalización política. Carrero y el régimen no fueron capaces de responder a las múltiples demandas de liberalización formuladas desde numerosos sectores de una sociedad española nueva y dinámica. No era de extrañar que la inflexibilidad ciega del régimen indujera a sus servidores más perspicaces a empezar a pensar en Juan Carlos y en posibles negociaciones con elementos moderados de la oposición. Pero esta es otra historia. ■